



Número 36 Enero-Junio 2017 ISSN 0185-6618

Ciencia y Universidad

Revista de economía

Las remesas como factor de convergencia económica interregional en México, 2003-2015

Oscar Peláez Herreros

TLC ANSEA-China: breve análisis de su desempeño económico

José Manuel Orozco Plascencia

Econofísica... Econo...que?

Víctor Hugo Gualajara Estrada

Guillermo Sierra Juárez

Fisionomías de las PyMEs en la Provincia de Buenos Aires en Argentina y su vinculación con el acceso al financiamiento externo

Lisana B. Martínez, M. Belén Guercio

Hernán P. Vigier

Economía regional y delincuencia en Michoacán

Jerjes Ixcoalt Aguirre Ochoa

Carlos Francisco Ortiz Paniagua

Evolución y caracterización de la educación superior privada en Sinaloa

Cuauhtémoc Espinoza Verduzco

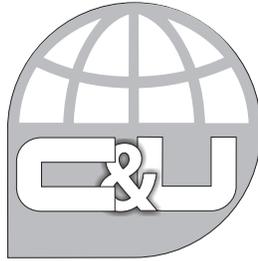
Jorge Rafael Figueroa Elenes



Ciencia y Universidad, es una publicación semestral, editada por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Año 19, número 36, correspondiente al período de Enero a Junio de 2017. Editor responsable Irvin Mikhail Soto Zazueta. *Certificado de Reserva número 04-2016-122014592500-102 expedido por la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido por la Secretaría Técnica Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, No 16078. ISSN 0185-6618. Latindex Folio 439.* Dirección de Ciencia y Universidad: Calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n, Ciudad Universitaria, Culiacán Sin., CP 80040, Teléfono y Fax 713 38 03. Este ejemplar se imprimió el día 30 de Junio de 2017 en los Talleres de Imprenta Universitaria, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Gabriel Leyva, Culiacán, Sinaloa, los ejemplares impresos se remiten para su distribución a la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Burócratas No.274-3 Ote., Col. Burócrata, Culiacán, Sinaloa, México.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Al reproducir contenidos e imágenes de la publicación agradeceremos la cita correspondiente tanto de autor como de la revista.



Ciencia y Universidad

Revista de economía



Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

México

Universidad Autónoma de Sinaloa

Juan Eulogio Guerra Liera / *Rector*

Jesús Madueña Molina / *Secretario General*

Ilda Elizabeth Moreno Rojas / *Directora de Editorial*

Juan Carlos Ayala Barrón

Director de Imprenta Universitaria

Jorge Rafael Figueroa Elenes

Director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Francisco Higuera Castro

Secretario Académico de la Faces

Benjamín Saavedra Núñez del Arco

Coordinador de Posgrado de la Faces

Irvin Mikhail Soto Zazueta / *Director de la Revista Ciencia y Universidad*

Moisés Alejandro Alarcón Osuna / *Editor académico*

Guillermo Sandoval Gutiérrez / *Editor técnico*

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Nora Teresa Millán López / UAS México.

Dr. Moisés Alejandro Alarcón Osuna / UAS México.

Dr. Arturo Retamoza López / UAS México.

Dr. Rafael Rentería Zatarain / UAS México.

CONSEJO EDITORIAL

Ph.D. Ajit Singh / University of Cambridge

Ph.D. Charles Jones / University of Cambridge

Ph.D. Ha-Joon Chang / University of Cambridge

Dra. Aida Rosario Hernández / INAH, UNAM. México.

Dr. Roberto Escalante Semerena / UDUAL

Dr. Carlos Tello Macías / UNAM. México.

Dr. Rolando Cordera Campos / UNAM. México.

Dr. Alberto Acosta / FLACSO. Ecuador.

Dr. René Ramírez / SENESCYT. Ecuador.

Dr. Pablo Martín Urbano / UAM. España.

Dr. Pablo Lacoste / Universidad de Santiago de Chile. Chile

Dra. Ana Urraca Ruiz / Universidade Federal Fluminense. Brasil.

Dra. Gemma Durán Romero / UAM. España.

Dr. Juan Ignacio Sánchez / UAM. España.

Dr. Wilman Gómez Muñoz / UdeA. Colombia.

Dr. Edgrar Negrin de la Peña / UCLM. España.

INDICE

Las remesas como factor de convergencia económica interregional en México, 2003-2015 Oscar Peláez Herreros	7
TLC ANSEA-China: breve análisis de su desempeño económico José Manuel Orozco Plascencia	33
Econofísica... Econo...que? Víctor Hugo Gualajara Estrada, Guillermo Sierra Juárez	63
Fisionomías de las PyMEs en la Provincia de Buenos Aires en Argentina y su vinculación con el acceso al financiamiento externo. Lisana B. Martinez, M. Belén Guercio, Hernán P. Vigier	83
Economía regional y delincuencia en Michoacán Jerjes Ixcoalt Aguirre Ochoa, Carlos Francisco Ortiz Paniagua	103
Evolución y caracterización de la educación superior privada en Sinaloa Cuauhtémoc Espinoza Verduzco, Jorge Rafael Figueroa Elenes	129

Economía regional y delincuencia en Michoacán

Jerjes Ixcoalt Aguirre Ochoa
jerjes_99@yahoo.com

Doctorado en Administración de Organizaciones (UNAM).

Adscripción: Profesor Investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Carlos Francisco Ortiz Paniagua
cfortiz@umich.mx

Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional (UMSNH)

Adscripción:

Profesor Investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Revista Ciencia y Universidad

No. 36 Enero-Junio 2017

Universidad Autónoma de Sinaloa. México.

ISSN 0185-6618

INDAUTOR (Reserva de derechos al uso exclusivo) 04-2016-122014592500-102

Abstract

Los niveles de inseguridad y criminalidad constituyen uno de los frenos para la atracción y/o consolidación de inversiones debido a que fomentan la incertidumbre. La consecuencia inmediata es una reducción del dinamismo económico. Sin embargo, se desconoce cuál es el nivel de incidencia que llega a tener el crimen organizado en la economía. Durante la última década (2005-2015) el estado de Michoacán ha experimentado un crecimiento en los niveles de delincuencia y criminalidad, principalmente de crimen organizado. El presente artículo, toma como referencia un modelo que relaciona las instituciones y su deterioro con la criminalidad. Para ello se realiza un análisis exploratorio de esta relación mediante el uso de técnicas de investigación cualitativa, complementado con datos oficiales y estimados sobre la economía regional de Michoacán. Los resultados apuntan a que se aprecia un deterioro de instituciones (económica, social y familiar), lo que sumado a los problemas estructurales de la economía michoacana genera sinergias que detonan en actividad delictiva.

Palabras clave: economía regional, delincuencia organizada, instituciones económicas.

Abstract

The levels of insecurity and criminality there are an obstacle to attracting and/or consolidating investments, because it generate uncertainty. The consequence is a reduction of economic dynamism. However, the level of incidence of organized crime in the economy is unknown. During the last decade (2005-2015), the state of Michoacán has experienced a growth in organized crime, mainly. The present article, takes as reference a model that relates the institutions and their deterioration with the criminality. The paper made an exploratory analysis of this relationship use of qualitative research techniques, complemented with official and estimated data on the regional economy of Michoacan. The results suggests to a deterioration of institutions (economic, social and family), which added to the structural problems of the Michoacan economy generates synergies that detonate in criminal activity.

Key words: regional economy, organized crime, economic institutions.

Introducción

Ante el clima de inseguridad en Michoacán durante los últimos años una pregunta coloquial ha sido ¿Hay relación entre economía y crimen? En caso de que así sea ¿Cuál es la importancia de las actividades ilícitas como el crimen organizado en las economías locales o regionales? Sin duda la respuesta se aleja de ser sencilla al menos por dos cosas: a) la ausencia de información sobre ese tipo de actividades económicas y b) la complejidad para entender el funcionamiento de la misma.

El objetivo del presente es identificar el vínculo de la economía con actividades delictivas, delincuencia y violencia ocurridas, en Michoacán en los últimos años. Para alcanzar el propósito se revisa una muestra de 11 municipios con trabajo de campo y algunos indicadores socioeconómicos a escala regional. Se emplea el Modelo de la Lafree (1998), adaptado para esta investigación, que atribuye la variación en el crimen y en la delincuencia a través del tiempo y entre las regiones, al colapso de las instituciones (gobierno, familia, escuela, iglesia etc.) y a la ausencia de relaciones comunitarias que motiven la cooperación entre las personas.

Este esquema plantea que la legitimidad es el elemento central del funcionamiento de las instituciones como creadoras de un orden mínimo de convivencia social. Para LaFree (1998) tres instituciones son fundamentales: la económica, la familiar y la jurídica. Los datos utilizados para este diagnóstico provienen de fuertes oficiales y del trabajo de campo realizado en Michoacán en los municipios seleccionados. Se observa, que como resultado del entorno de violencia, existen efectos negativos claros en las decisiones de inversión de los empresarios y en general en la actividad económica de la entidad. Se concluye que la economía michoacana presenta problemas estructurales que propician las disparidades regionales y la desigualdad en los niveles de ingreso. Sin embargo, estas circunstancias estaban presentes desde antes de la emergencia del crimen organizado en la entidad, por lo que los factores económicos no pueden considerarse aisladamente como causas de la situación de violencia. Es prioritario una mayor atención a los aspectos económico dentro de una estrategia integral de combate a la inseguridad.

Situación económica y crimen: antecedentes y perspectiva teórica

La investigación realizada en el mundo no ha establecido con claridad una relación constante entre crimen y la situación económica general (Finklea,

2011). La mayor parte de las investigaciones muestran correlaciones débiles entre los distintos tipos de crimen y la situación económica de un país. Sin embargo, la simbiosis crimen-economía es señalada dentro de la mayor parte de las explicaciones al porque las personas delinquen.

Un análisis en más de 15 países sobre la relación entre crimen y economía, se identifica al menos un predictor económico para al menos un tipo de delito en doce países (80%), lo que sugiere cierta asociación global entre los cambios económicos y la delincuencia. Para la ONU los cambios en la economía se asocian con cambios en la delincuencia, durante las épocas de crisis, con un aumento de hasta dos veces en contextos de tensión económica. Estos resultados son consistentes con la teoría de la motivación criminal, lo que sugiere que el estrés puede aumentar el incentivo para que las personas se involucren en conductas ilícitas.

La relación entre desigualdad y delincuencia también ha sido objeto de las teorías sociológicas sobre la delincuencia. La teoría de la "privación relativa", afirma que la desigualdad engendra tensiones sociales cuando los menos acomodados se sienten desposeídos en comparación con las personas más ricas (Stak, 1988) lo que lleva a la sensación de desventaja e injusticia de los pobres y a la justificación a pedir una indemnización y satisfacción por todos los medios, incluyendo la comisión de crímenes tanto contra pobres como ricos. De acuerdo con Morrison, (1971), la Teoría de la Privación Relativa se refiere a la idea de que los sentimientos de privación y el descontento se relacionan con un punto de referencia deseado (es decir, la referencia a grupos). Los sentimientos de privación relativa surgen cuando los deseos se convierten en confianza legítima y esos deseos son bloqueados por la sociedad. La privación relativa es generalmente considerada como la variable central en la explicación de sociales movimientos y se utiliza para explicar la búsqueda de un cambio social que inspira movimientos sociales; los movimientos sociales surgen de sentimientos colectivos de privación relativa (Morrison, 1971:678).

En relación con el desempleo y el crimen, la revisión teórica muestra grandes diferencias en dicha correlación con algunos estudios que identifican relaciones débiles, otros relación significativa, y otros más donde no hay relación entre las tasas de desempleo y la delincuencia (Melik, 2003; Entorf, 2014). Las razones para esto son múltiples, no toda la gente que enfrenta problemas financieros graves recurre a la delincuencia.

La teoría de la oportunidad criminal sugiere que en el mismo tiempo que el estrés en ingresos proporciona incentivos para delinquir, la baja actividad económica disminuye la producción y el consumo por lo que la delincuencia se reducirá como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas que reducen el valor o de la disponibilidad de objetivos criminales (Cohen, 1979). Siguiendo la perspectiva de Becker, (1974), los costos de delinquir participando en grupos delincuenciales, es menor, lo que se relaciona con las carencias de ingreso de la población. No obstante, el costo público tiende a crecer en la creación de órganos y aparatos para la prevención y atención al crimen.

En tanto que otro factor a considerar es la pobreza para el análisis del crimen. La pobreza puede llevar a altos niveles de estrés que a su vez puede llevar a los individuos a cometer hurto, robo, u otros actos violentos. Por otra parte, la pobreza puede conducir a una educación deficiente que cause que los jóvenes cuenten con menos acceso a escuelas de calidad, empleos y modelos de conducta, disminuyendo los costos de oportunidad de la delincuencia y al aumento de la probabilidad de que el gasto en tiempo de los jóvenes se asocia la calle con pandillas o grupos criminales (Jens, 2000).

En cuanto a la relación entre crimen e inversiones, algunos trabajos (Vitorio, 2008; Gómez, 2012) demuestran la existencia de una relación inversa, dado que el incremento de los niveles de criminalidad, conlleva a un incremento de la incertidumbre y los riesgos, situación que deriva en una reducción de los flujos de inversión, No obstante, la tasa de rendimiento suele tener influencia en la decisión, dado que el crimen forma parte del riesgo de la inversión, por lo que hay niveles tolerables de riesgo. A la vez que una baja tasa de retorno en relación al riesgo, tiene el efecto de reducir sensiblemente las inversiones.

Otro elemento característico del nivel de seguridad y gobernabilidad se relaciona con la magnitud de la economía informal, su nivel de participación en la economía total se puede explicar por la suposición de elementos como: impunidad, corrupción, falta de mecanismos de supervisión desde la autoridad formalmente establecida y tasas de desempleo. No obstante, indicadores como el consumo de electricidad es una medida alternativa de medición de la actividad económica. A diferencia de PIB y otras estadísticas oficiales, el consumo de energía depende del nivel de actividad tanto en el sector formal y no formal de la economía.

Suele ser una medida utilizada para estimar el tamaño de la economía informal, al ser una buena fuente para poder medir la adición o la destrucción de

capital que puede existir. En el estudio de Johnson, Kaufmann y Shleifer (1997) demuestran las diferencias entre las cifras oficiales de la economía y el hallazgo de la importancia de la economía informal (no oficial), en la cual se aprecian diferencias sustanciales en las economías europeas y euroasiáticas. A partir de un modelo que permite correlacionar el consumo de energía eléctrica y la actividad económica; encontrando que las reformas regulatorias en impuestos tienen un impacto directo en el comportamiento de la economía informal. En el presente trabajo, se relaciona la economía informal con el comportamiento de los empresarios, su estatus de formalidad y la relación con el crimen organizado.

Materiales y métodos

La metodología empleada se integra de dos aspectos: 1) compilación de información e integración regional de la misma; 2) entrevistas a profundidad a pobladores. En el primer punto, se indagó sobre la información existente y se realizó el cálculo del PIB municipal y regional; con el propósito de apreciar variaciones para los años seleccionados. En tanto que para el segundo punto, se realizaron visitas a campo seleccionando once municipios de los 113 del estado, de acuerdo con los siguientes criterios: 1) se empleó la regionalización del estado; 2) cercanía y vías de comunicación con la ciudad de Morelia; 3) tener una ciudad importante en el ámbito regional; 4) que exista interacción urbano-rural; 5) cercanía a las zonas con amplia confluencia de personas; 6) que se tenga documentada la existencia de células de crimen organizado y 7) municipio importancia demográfica relativa en la región.

1) Se empleó la regionalización oficial de Michoacán. Como instrumento de planeación, diagnóstico delimitación geográfica, el estado de Michoacán se integra en 10 regiones. (INAFED, 2016)

2) Relativa cercanía y vías de comunicación con la ciudad de Morelia. Los costos de desplazamiento fueron una variable clave para decidir realizar el traslado y también lugar la seguridad del entrevistador. Por ello se trató de sitios que comunicados directamente con la ciudad de Morelia; con una escala de primacía de escala inferior a dicha ciudad, en el sistema de ciudades de Michoacán. Morelia tiene una jerarquía de cinco (Almanza, 2016:21); las otras ciudades tienen un rango inferior.

3) Contar con una ciudad importante en el ámbito regional. Las ciudades son centros de aglomeración económica, política, social, demográfica

y cultural. Sin embargo, también la información fluye de manera importante, es por ello que las percepciones, así como las noticias sobre los sucesos del crimen organizado y la criminalidad, pueden encontrarse con relativa frecuencia y abundancia en las ciudades con importancia regional. El municipio y la ciudad son importantes en la región a medida que ocurren transacciones o muestran confluencia de otros municipios para la realización de actividades como trámites administrativos, centros de estudio, entidades bancarias y mercados de medio mayoreo y mayoreo (de abastos).

4) Existencia de interacción urbano-rural. Cuando se tiene esta interacción hay una mayor afluencia de flujos de información, así como de intercambio comercial y demográfico. A la vez se tiene representatividad de lo rural y lo urbano, como puntos de referencia para otorgar información.

5) Cercanos de zonas de amplia confluencia de personas. En materia de seguridad del entrevistador, es necesario acercarse a los puntos de confluencia de personas como elemento de protección y seguridad y no exponerse a realizar entrevistas en zonas alejadas. Lo anterior por la incertidumbre de a quién o quiénes se entrevista.

6) Tener documentada la existencia de células de crimen organizado en la región. Las entrevistas cobran más sentido cuando hay una noticia latente respecto de la inseguridad, la criminalidad y el crimen organizado. Es por ello que aquéllas ciudades con presencia de criminalidad entraron en la selección para la realización de entrevistas a profundidad.

7) Por una parte la proporción poblacional del municipio en la región supera al promedio de los otros municipios en la misma.

Resultados: Socio-economía por regiones en Michoacán y presencia de la economía criminal

El caso de Michoacán se puede analizar a partir de los indicadores de marginación y desempleo en estado y los municipios seleccionados (véase tabla 1). En concordancia con la situación general del país, de 2000 a 2010, no se observa una disminución significativa de las tasas de marginación ni de desempleo, con excepción de Charo, todos los municipios muestran un creciente desempleo. El estado continúa en una situación de alta marginación. A nivel nacional Michoacán aumentó dos niveles en la escala de marginación al pasar del lugar número diez al ocho. Vale la pena mencionar que el municipio de

Charo se ubica en la zona industrial de la frontera con la ciudad de Morelia, por lo que la expansión de empresas en la zona ha favorecido a dicho indicador.

En la tabla 1, se pueden destacar un par de elementos que consideramos relevantes: Huetamo muestra una notable reducción poblacional de 2000 a 2010, a diferencia de los demás municipios seleccionados, cuya población a mantenido crecimiento. Y otro aspecto destacable es que los municipios con mayor desigualdad en la distribución del ingreso son: Aquila, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro; así como los municipios con mayor PEA desocupada son: Charo, Maravatío y Lázaro Cárdenas.

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos de los municipios seleccionados

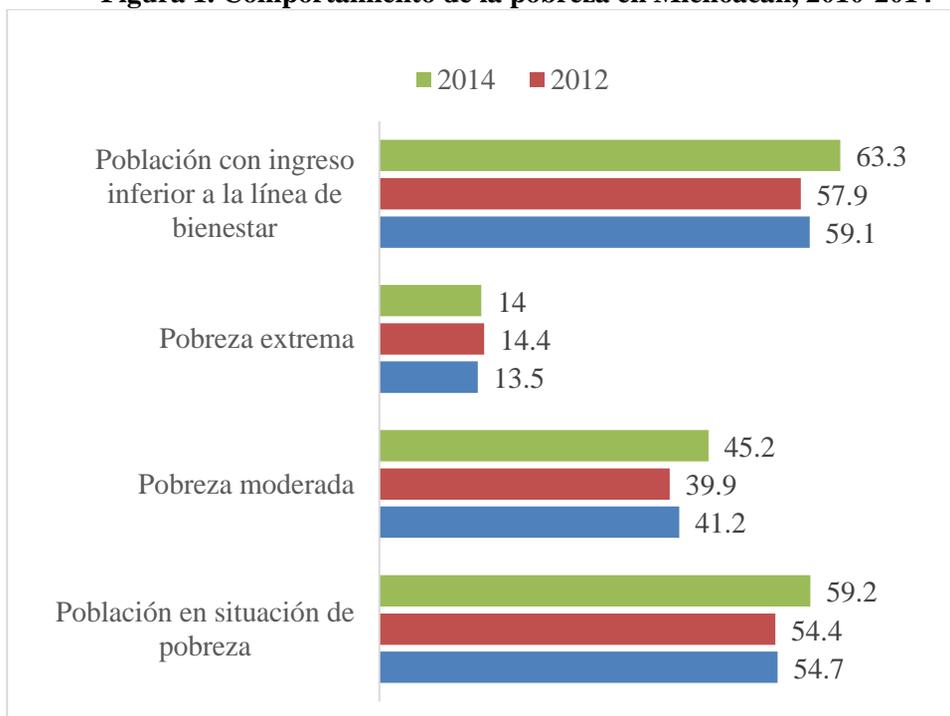
	Población 2000 (a)	Población 2010 (a)	Gini (b)	Pobreza (b)	IDH (c)	Grado de Marginación 2000 (d)	Grado de marginación 2010 (d)	PEA desocupada /PEA Ocupada a 2000	PEA Desocupada /PEA Ocupada 2010
Apatzingán	117949	123649.0	0.43	17.9	0.75	Bajo	Medio	0.86%	2.28%
Aquila	22152	23536.0	0.68	25.3	0.63	Muy Alto	Muy Alto	0.70%	2.87%
Charo	19169	21723.0	0.43	46.5	0.73	Medio	Medio	27.10%	7.57%
Hidalgo	106421	117620.0	0.46	26.0	0.74	Medio	Medio	0.87%	5.09%
Huetamo	45441	41937.0	0.49	26.2	0.71	Alto	Alto	0.84%	3.11%
Maravatío	69382	80258.0	0.50	33.6	0.72	Alto	Medio	0.85%	6.69%
Lázaro C.	171100	178817.0	0.41	13.6	0.79	Muy Bajo	Muy Bajo	1.56%	6.11%
Morelia	620532	729279.0	0.43	13.9	0.83	Muy Bajo	Muy Bajo	1.41%	4.99%
Uruapan	265699	315350.0	0.43	44.8	0.78	Bajo	Muy Bajo	1.27%	2.74%
Zamora	161918	186102.0	0.43	16.0	0.78	Bajo	Bajo	1.21%	3.36%
Zitácuaro	138050	155534.0	0.49	31.1	0.75	Medio	Medio	1.37%	4.76%

Nota: Gini, coeficiente de desigualdad en la distribución del ingreso; Pobreza se refiere a la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza, según el índice FGT; IDH = Índice de Desarrollo Humano.

Fuentes: a) INEGI, 2000 y 2010; b) Navarro, *et. al.* 2001; c) Navarro, *et. al.* 2010; Navarro, *et. al.* 2008. Censos de INEGI 2000 y 2010.

En municipios que se observan niveles altos de violencia como Apatzingán se visualiza un incremento de la tasa de marginación. Sin embargo, se observa que existen municipios que han experimentado una relativa mejoría como Maravatío y Uruapan al pasar del nivel alto de marginación a nivel medio. El dato más significativo es el incremento de la población desocupada como proporción de la PEA en la mayor parte de los municipios y en el estado en general, situación que se acompaña con las bajas tasas de crecimiento económico en los últimos años. A la vez que los municipios que tienen los menores niveles de desarrollo humano son: Aquila, Huetamo Charo y Maravatío.

Figura 1. Comportamiento de la pobreza en Michoacán, 2010-2014



Fuente: CONEVAL, 2017.

Existen muchos otros factores que influyen en la delincuencia y se correlacionan con la pobreza. Sin embargo, no se ha establecido con claridad y rigor una teoría social sistemática que tenga la fortaleza necesaria para afirmar que las causas sociales, como la pobreza, sean las únicas causantes de la delincuencia. Esto aterrizado al caso de Michoacán quitaría peso al argumento de la pobreza como factor causal fundamental del crimen y la delincuencia.

Las causas de incremento en la delincuencia son múltiples, desde: sociales (como modelos de familia), institucionales, (implementación del sistema judicial), entorno físico-urbano (carencia de servicios, ausencia de seguridad, políticas de diseño urbano e invasión de espacios públicos), agravamiento de la pobreza, aumento de los costos de seguridad y desarrollo de empresas de seguridad (Vanderschueren, 2000).

La situación de pobreza no es reciente en la entidad y la emergencia de grupos criminales ocurre en un momento en que las contradicciones económicas y políticas de la entidad hacen eclosión con los resultados descritos. Si bien no existen mediciones de pobreza en el estado y en los municipios de la década de los setentas y ochentas del siglo XX es muy probable pensar en niveles de pobreza similares a los actuales. ¿Cuál fue el hecho determinante para los altos niveles de violencia observados actualmente? La explicación se encuentra muy probablemente en la estrategia seguida por el gobierno mexicano en la llamada “guerra contra las drogas” que intento fallidamente fraccionar a los grandes carteles en pequeñas bandas y que desarticuló equilibrios de poder entre los grupos delincuenciales que incrementaron la violencia y las muertes (Aguilar, 2015; Ríos, 2013).

Respecto del papel de la pobreza y la delincuencia, las respuestas en las entrevistas a profundidad realizadas reflejan que para los individuos de más bajos niveles de ingreso, el salario percibido en la actividad criminal era un importante aliciente. Tal como se puede percibir en las entrevistas a profundidad... *“Los malos ofrecían 2500 pesos por semana, más de lo que se conseguía como peón en el limón o trabajando de albañil”*. Otras respuestas se daban en términos de *“Muchos batos jóvenes se dedican a andar con los malos por qué es lo único que pueden hacer pa'l taco”*... Estas respuestas indican que la posibilidad de un ingreso si fue un factor determinante en la incorporación de jóvenes a los grupos delincuenciales. La tabla 2, permite distinguir los municipios y su integración a la región numerada correspondiente, a los 113 municipios ubicados en 10 regiones.

Tabla 2. Integración municipal de las regiones en Michoacán

Región 1.	Briseñas, Chavinda, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Marcos C. Pajacuarán, Purépero, Cojumatlán, Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano C., Villamar, Vista H., Zamora.
Región 2.	Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, Morelos, Numarán, Panindícuaro, Penjamillo, La Piedad, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, Zacapu, Zináparo y José Sixto V.
Región 3.	Acuitzio, Alvaro O., Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Santa Ana M., Tarímbaro y Zinapécuaro.
Región 4.	Anganguero, Aporo, Contepec, Epitacio H., Hidalgo, Irímbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Susupuato, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla y Tzitzio .
Región 5.	Zitácuaro, Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Parácuaro, Peribán, Los Reyes, Tepalcatepec, Tingüindín y Tocumbo.
Región 6.	Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo P., Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro.
Región 7.	Erongarícuaro, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador E., Tacámbaro y Tzintzuntzan.
Región 8.	Carácuaro, Huetamo, Madero, Nocupétaro, San Lucas y Turicato.
Región 9.	Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro C. y Tumbiscatío
Región 10.	Ario, Churumuco, Gabriel Z., La Huacana, Múgica y Nuevo U.

Fuente: INAFED, 2016.

En el escenario estatal en su conjunto como se aprecia en la Tabla 3, desde aspectos socioeconómicos, se muestran una relación entre el comportamiento poblacional y la actividad económica; reducciones en la proporción de la población regional respecto al estado, se ven acompañados por reducciones de la actividad económica regional. De la misma manera, las regiones con economías y crecimiento poblacional más dinámicas, muestran también una mayor equidad en la distribución del ingreso, medido por el Índice de Gini (columna -b-). A la vez que se aprecia correspondencia entre la pobreza como promedio regional de proporción de población (columna -d-), desigualdad en el ingreso, desarrollo humano, economía y población.

Se puede apreciar una mayor propensión a la actividad delictiva en las regiones que tienen un bajo desempeño en los indicadores de desigualdad, pobreza, desarrollo humano y economía regional. Nótese que las región 5 mantiene la participación poblacional, sin embargo ha reducido notablemente su participación en la economía en diez años, situación que puede estarse agudizando para 2015, según la percepción de la población. En una situación similar se ubican las regiones 5, 6, 8 y 10.

Tabla 3. Indicadores socioeconómicos de Michoacán por regiones

Región	Población Regional (a)		PIB regional (b)		(c)	(d)	(e)
	2000	2010	2005	2012	Gini Desigualdad	Pobreza (%)	IDH
1	13.4%	13.2%	11.0%	10.8%	0.46	25	0.75
2	11.1%	10.1%	8.9%	8.5%	0.58	43	0.75
3	21.5%	23.1%	34.7%	41.3%	0.51	36	0.74
4	14.0%	14.0%	6.4%	6.3%	0.55	41	0.70
5	8.7%	8.4%	8.2%	6.8%	0.45	25	0.74
6	11.5%	12.3%	12.4%	11.3%	0.47	35	0.72
7	5.9%	6.2%	3.1%	3.1%	0.55	41	0.73
8	3.4%	2.9%	1.6%	1.1%	0.59	42	0.67
9	6.8%	6.2%	8.4%	8.9%	0.59	37	0.70
10	3.8%	3.6%	2.8%	2.0%	0.47	32	0.70

Nota: Gini, coeficiente de desigualdad en la distribución del ingreso; Pobreza se refiere a la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza, según el índice FGT; IDH = Índice de Desarrollo Humano.

Fuentes: a) INEGI, 2000 y 2010; b) Presente estudio; c) Navarro, *et. al.* 2001; Navarro, *et. al.* 2010; Navarro, *et. al.* 2008.

Diagrama 1. Comportamientos poblacional y económico (PIB) por regiones en Michoacán

III	Población	(+)	I
<i>Regiones 4, 6 y 7</i>		<i>Región 3</i>	
(-)			(+)
<i>Regiones 1, 2, 5, 8 y 10</i>		PIB	
IV		(-)	II
		<i>Región 9</i>	

Fuente: Tabla3.

Con el propósito de clasificar las economías regionales y el comportamiento poblacional, el diagrama 1 muestra la relación entre ambos elementos, para una década. Se puede apreciar en el cuadrante I que solo una región ha ganado participación económica y participación poblacional en Michoacán; la región 3 (Centro); sin duda impulsada por el dinamismo de la ciudad de Morelia. El cuadrante II, muestra que a escala regional se aprecia un crecimiento de marginal de la actividad económica con una disminución de la población. Al tener a Lázaro Cárdenas en esta región, se puede apreciar un dinamismo de la economía, no obstante una tendencia ligera al despoblamiento. La situación más crítica se aprecia en las regiones que pierden población y también pierden dinamismo económico, ubicadas en el cuadrante IV, se aprecian las regiones 1, 2, 5, 8 y 10. Por último en el cuadrante III, se aprecian tres regiones: 4, 6 y 7, con reducción en la participación de ambas variables PIB y población.

Otro indicador que puede arrojar señal, sin que sea concluyente, en términos de la relación entre economía y crimen, es que la participación

económica de Michoacán. Hasta 2001 se había mantenido entre 2.4% y 2.5% del PIB nacional, situación que después de 2009 se ha revertido y en 2013 esta cifra alcanzó 2.28%. Sin embargo, una explicación más amplia del fenómeno del crimen organizado en Michoacán no puede darse a partir del culpar únicamente a la economía del problema, dado que se trata solo de un pivote importante dentro de una explicación más articulada.

En el estado existen industrias exitosas, divorciadas de los niveles de bienestar de la población en general. Este es el caso de la industria del aguacate, de la fresa y en menor medida del acero. En el caso del sector agrícola, a pesar de los incrementos en los volúmenes de exportación de aguacate, los ingresos derivados de la exportación no se han traducido en mejoras en los indicadores de bienestar de la población (Morales, 2013).

Municipios productores como Uruapan muestran alguna mejoría en sus niveles de marginación, sin que logre destacarse un aumento significativo en una región que ha experimentado éxito con su principal producto de exportación. De acuerdo al COMA (2012), *La producción de aguacate representa la principal actividad económica de Michoacán, generando más de 16,800 empleos fijos al año y más de 70,000 empleos temporales ligados a la actividad; sumando más de 6 millones de jornales al año y una derrama económica de más de 750 millones de pesos al año.*

No obstante, han ampliado los diferenciales de ingreso entre la comunidad fomentando condiciones para la criminalidad. Para el caso de la industria del hierro, la situación es similar. A pesar de ser el principal productor nacional de mineral de hierro, Michoacán no experimentó con el auge de esta industria de mejoras sustantivas en sus indicadores de bienestar, demostrando la desvinculación con el bienestar de la población. Municipios como Aquila, con una alta vocación minera, no muestran mejoras en sus indicadores de marginación (Tabla 1).

Las industrias exitosas pueden más bien incrementar la presión social para delinquir en vista del éxito relativo de algunos grupos sociales. El progreso que muestran segmentos de la población vinculados directamente a las industrias locales exitosas es un duro recuerdo a la mayoría de la población de las condiciones de pobreza en la que viven. Ante grupos de población pobres, con bajos niveles de ingreso, delinquir se convierte en una alternativa atractiva en un contexto de pocas oportunidades de ascenso social por las vías legales (Ríos, 2008). La correlación podría plantearse como el que las industrias

relativamente exitosas de muchos municipios del estado no están produciendo los efectos en cascada y positivos sobre el resto de la comunidad.

Al respecto, las entrevistas a profundidad realizadas en los municipios señalados muestran, efectivamente, un alto grado de exposición de riqueza por parte de los grupos económicos privilegiados de la región, como de los propios grupos delincuenciales que coexisten con los ciudadanos comunes en la mayor parte del estado. Muchos jóvenes consideran como un estereotipo válido el del “narco” que perciben como un individuo exitoso cuyo comportamiento y actitudes son necesarios de emular.

En el enfoque de Becker (1974), las entrevistas observaron que los costos de delinquir disminuyen ante poblaciones empobrecidas, lo que constituye uno de los elementos para tomar la decisión de emplearse en el sector criminal. Las entrevistas reflejan este punto de vista de la sociedad local al manifestar, *“la maña no da un ingreso seguro y más del que nos dan trabajando en el campo, los jornales aquí son de 200 pesos y la paga allá es mucho mayor”*.

Efectos sobre la Inversión Extranjera Directa (IED)

Otro aspecto económico que debe señalarse es el efecto que tuvo la delincuencia organizada en el ánimo de los inversionistas extranjeros. Es claro el efecto negativo que tuvo el crimen en los flujos de inversión extranjera en Michoacán. Esto es congruente con la mayor parte de los estudios existentes sobre la relación entre IED y crimen organizado (Vitorio, 2008; Gómez, 2012). Esta percepción puede darse a partir de dos hechos sustantivos. El primero es el caso de la pista de vehículos construidos por la General Motors en 2008 en la localidad de Cupuán del Río en el municipio de La Huacana.

Esta pista de prueba tuvo que ser abandonada por la empresa en 2013 por la presencia de grupos del crimen organizado en la comunidad que dificultaban las condiciones de seguridad de los trabajadores de dicha pista. Este hecho tuvo un valor cualitativo importante ya que contribuyó a la generación de un sentimiento adverso sobre Michoacán de la inversión extranjera que por muchos años tuvo un peso importante al financiar actividades agroindustriales en la región (Daniele & Marani, 2011).

El segundo elemento es la presencia del crimen organizado en la producción de hierro en la que existía un mercado paralelo que compraba dicho mineral a los productores locales para su exportación ilegal hacia China. La

principal empresa trasnacional que opera en esta industria sufrió de pérdidas económicas y humanas por la actividad criminal en la región. La intervención del Gobierno Federal en el Puerto de Lázaro Cárdenas provocó que las exportaciones de mineral de hierro bajaran de 10 millones de toneladas en 2013 a 2.2 millones en 2014. De acuerdo con cálculos del gobierno federal en 2012 de las ocho millones de toneladas que México exportó, alrededor de dos millones no contaban con los permisos correspondientes (AP, 2015).

La existencia del crimen organizado dificultó la cadena de distribución de productos básicos en la región de Tierra Caliente, deprimió los precios de bienes raíces y en muchos casos dificultó la ejecución de programas sociales en la zona. Otras actividades como la educación y la recolección de información estadística también fueron afectadas.

Crimen e inversión privada.

La experiencia internacional muestra que el crimen tiene profundos efectos negativos en el desarrollo económico y específicamente en la inversión privada. Las experiencias más cercanas al crimen organizado pueden encontrarse en Italia, el caso clásico, y en Latinoamérica, en Colombia. En este último país existe poca investigación formal que pueda servir como referente al caso mexicano. En el caso de Italia, las regiones de Apulia y Basilicata, observaron un descenso en sus tasas de crecimiento económico como consecuencia de las olas de crimen organizado durante los últimos 25 años (Pinotti, 2014).

La baja del crecimiento de estas regiones se da aún considerando el hecho de que existen regiones de Italia en las cuales la presencia del crimen organizado data de 150 años y en las cuales se dio tasas de crecimiento económico todavía más bajas. Sin embargo, la presencia ancestral de pobreza complica establecer claramente la causalidad entre crimen y pobreza. Pinotti señala que la pérdida agregada que implica la presencia del crimen organizado asciende a 16% del PIB per cápita y se da principalmente a través de una reasignación de la actividad económica privada a la inversión pública.

Para el caso de Michoacán es importante definir el peso que pudo tener la presencia criminal en los niveles de inversión. La actividad criminal disminuye los niveles de actividad económica al desalentar las decisiones de inversión de los agentes económicos. Durante las entrevistas a profundidad realizadas se pudo observar que la mayor parte de los entrevistados que poseían

algún pequeño negocio habían disminuido sus inversiones ante la ola de violencia observada y sobre todo por la presencia de extorsiones. Estas tuvieron un claro impacto en la economía estatal, desde las extorsiones y cobro de cuotas para productores agrícolas Acosta, 2014, Matilde, 2011; hasta otros negocios como el precio de la tortilla, (Redacción, 2011) e industria minera, (Red Política, 2014).

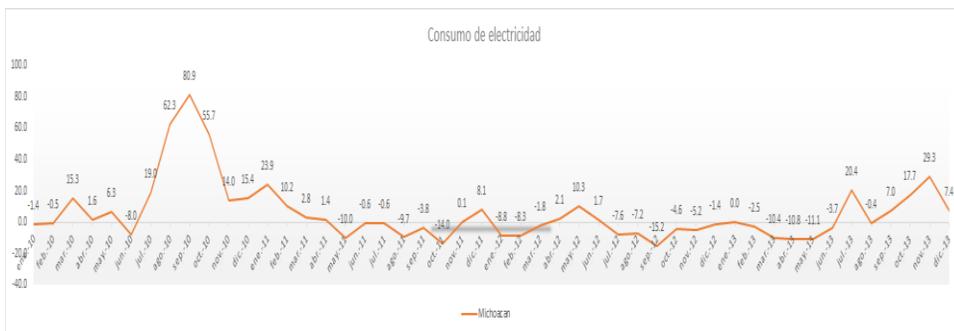
Durante años se vivió una situación en la que los empresarios estatales afrontaban una tasa de impuestos adicional por concepto de pagos de “derechos de piso” a los grupos criminales. Esta práctica criminal se dio en los sectores de más generación de empleo en la entidad como el sector aguacatero y la minería. De acuerdo a los entrevistados, las extorsiones tuvieron impactos negativos en los niveles de inversión y empleo. Muchos entrevistados mencionaron el haber considerado el cambiar de domicilio o cerrar sus empresas para evitar las extorsiones o lo secuestros.

Asimismo, se observó que la mayor parte de los empresarios llevan años sobreviviendo en entornos difíciles por lo que han aprendido e incorporado estrategias para lidiar con la inseguridad. Estas estrategias se relacionaban fundamentalmente con el manejo de imagen de sus actividades para disfrazarlas y hacerlas poco atractivas y llamativas a la delincuencia. Sin embargo, la ola de crimen, particularmente en 2013, hizo casi imposible evitar los problemas relacionados con la delincuencia. Muchos de los entrevistados que poseían algún pequeño negocio al verse sometidos al pago de cuota y extorsiones señalaron que fue usual mover su negocio a otro domicilio con las puertas cerradas con la intención de hacerlo poco visible a los delincuentes. Asimismo, otros entrevistados manifestaron su decisión de postergar inversiones a consecuencia de la inestabilidad observada. Esto muy probablemente generó un incremento en los niveles de informalidad de la economía. Sin embargo, es difícil determinar datos precisos sobre la economía informal y su evolución.

Con el objeto de determinar el impacto del crimen en la actividad económica se utilizó el consumo de electricidad que es una medida alternativa de medición de la actividad económica. A diferencia de PIB y otras estadísticas oficiales, el consumo de energía depende del nivel de actividad tanto en el sector formal y no formal de la economía. Suele ser una medida utilizada para estimar el tamaño de la economía informal (Johnson, 1997) al ser una buena fuente para poder medir la adición o la destrucción de capital que puede existir.

Para el caso de México a existencia de un monopolio de energía eléctrica facilita utilizar el consumo de energía eléctrica como un indicador de actividad económica. Con el objeto de verificar este dato se analizó el Indicador Estatal Mensual de Electricidad, proporcionado por el INEGI. A partir de esta fuente se observó una disminución de los volúmenes de consumo de electricidad en el estado de 2010 a 2013. Estas cifras contrastan con los datos a nivel nacional y de otras entidades que muestran crecimientos. Esto puede reflejar el efecto negativo que pudo tener en la economía la presencia de crimen organizado.

Figura 2. Índice de consumo de energía eléctrica en Michoacán



Fuente. INEGI, Banco de Datos Económicos.

Remesas

Otros elemento que debe destacarse dentro del análisis del institución económica del estado es el relativo al importante papel que juegan las remesas en la economía del estado de Michoacán y en los municipios seleccionados. Michoacán es el estado que más remesas recibe del país y es el principal sostén de muchos de los hogares michoacanos. La amplia investigación realizada sobre el uso de las remesas refleja que estas se destinan a la compra de alimentos, vivienda y ropa (Aguirre, 2013). Lo peculiar de estos recursos es que constituyen transferencias directas a los hogares.

La investigación realizada sobre remesas y crimen en México demuestra que estas transferencias se encuentran asociadas con una disminución en la tasa de homicidios y de otros delitos. Por cada 1 por ciento de aumento en

el número de hogares que reciben remesas se reduce la tasa de homicidios en un 0.05 por ciento. Si se analizan otros tipos de delitos se observa una reducción en el robo a transeúntes en un 0.19 por ciento por cada aumento del 1 por ciento en los hogares que reciben remesas (Brito, 2014). Estos datos son previsible en un contexto en que estos recursos ayudar a los individuos a mantener sus niveles de consumo disminuyendo los costos de oportunidad de delinquir.

A partir de los datos de campo recolectados, se observó que en el caso de Michoacán, las remesas no funcionaron como elementos contenedores del delito. De acuerdo a lo señalado por los entrevistados las remesas crearon más bien un circuito de comunicación entre las comunidades de michoacanos en Estados Unidos y en Michoacán que muchas veces favoreció actividades ilícitas. Se señaló que el tráfico de ciertos enervantes se asocia con la presencia de grupos familiares o amistosos que posibilitan la producción en Michoacán y la distribución de enervantes en EUA.

Asimismo, se manifestó en las entrevistas que muchos de las personas involucradas con la actividad criminal son binacionales con actividades en los dos países. Las remesas pudieron propiciar una situación en la que existiera disponibilidad de tiempo para dedicarse a actividades ilícitas en función de la seguridad que los envíos e dineros de Estados Unidos proveían a las familias para la satisfacción de sus necesidades más básicas.

En las entrevistas a profundidad realizadas se preguntó acerca del rol que estaban jugando las remesas en la contención de actividades criminales por parte de la población. Al respecto, se señaló que muchas veces las remesas incrementaban el gusto o la necesidad de los receptores de remesas por artículos no esenciales tales como aparatos electrónicos, vehículos o ropa, que muchas veces traían los migrantes que regresaban a sus regiones y que no podían ser comprados con las cantidades de dinero que enviaban los migrantes calibradas para responder a necesidades básicas o inmediatas de sus familiares en México. Se señaló que estos gastos suntuarios eran muchas veces la razón para enrolarse en el crimen organizado. Sin embargo, debe destacarse, que la mayor parte de las respuestas se dio en términos de reconocer la importante ayuda de las remesas para mantener niveles mínimos de consumo.

Un aspecto sustancial que debe ser abordado es que las entrevistas revelaron la existencia de importantes circuitos de interacción en todos los órdenes de las comunidades mexicanas en Michoacán y en el propio EUA. Las remesas son solo una parte de los vasos comunicantes entre los mexicanos en

ambos lados de la frontera. Los entrevistados señalaron por ejemplo que después de las crisis de 1998 en EUA, que afectó muchos de los sectores intensivos en mano de obra que tradicionalmente ocupan a los mexicanos, los envíos de remesas disminuyeron y los efectos de la crisis estadounidense se sintieron en sus regiones.

La informalidad como factor impulsor del crimen

Un factor sustantivo dentro del análisis de la institución económica es el relativo a la fuerte presencia de una economía informal en el estado de Michoacán y en los municipios analizados. La existencia de un mercado de compradores y vendedores en la economía informal predispone a los ciudadanos a la ilegalidad creando el capital humano necesario y proveyendo una moral social de apoyo a actividades fuera del marco legal (Lotspeich, 1995). La existencia de una amplia red de actividades ilícitas en Michoacán pudo haber sido un factor determinante en facilitar el involucramiento de miles de personas en la actividad ilegal en Michoacán.

La presencia del crimen organizado en los municipios analizados tuvo como efecto colateral el “formalizar” la existencia de estructuras informales de actividad económica. A la existencia de innumerables puestos de mercancías piratas se sumó las actividades ilegales de tráfico de enervantes, que muchas veces fueron vistas como una continuidad de actividades económicas informales ya existentes. El paso de vender mercancías ilegales a contribuir a alguna etapa del proceso de producción de enervantes fue visto como un proceso normal. De acuerdo con las entrevistas realizadas: *“Yo vendía discos compactos piratas en una esquina del mercado, me iba más o menos bien, pero cuando llegó la familia y me ofreció entrarle al negocio del cristal, me pareció una buena idea, todos estamos metidos en negocios ilegales aquí”*.

La presencia de actividades económicas informales tuvo un peso sustantivo en la aceptación de actividades económicas ilícitas que implicaran un nivel más alto de riesgo. La casi generalizada presencia del crimen organizado en la mayor parte de las actividades económicas fue un proceso que se dio muy probablemente a partir de la aceptación inicial de actividades en la economía informal.

Un aspecto final que debe señalarse es la aprobación social que manifestaron muchos de los entrevistados a la regulación económica que impusieron los criminales en muchos de los municipios entrevistados,

particularmente en Apatzingán y Nueva Italia. *“El gobierno no impone el orden, si alguien te debía dinero era mejor acudir con los templarios que se encargaban de cobrarlo rápido, mucho más que meter juicio”*. Otro juicio usual fue *“los templarios hacían que las cosas fueran derechas y durante un tiempo fue así”*. Estas afirmaciones son claras en el sentido del fracaso de la institución económica oficial y del hueco que fue llenado por las regulaciones que imponían los grupos criminales. Los entrevistados señalaron que al paso del tiempo, el orden impuesto por los grupos criminales, derivó en situaciones de franco abuso y expoliación a las comunidades.

Conclusiones

En el sentido de Lafree existe un deterioro de la institución económica en los municipios investigados y en el estado en general. Existe pobreza, desigualdad y actividades agrícolas exitosas solo para unos cuantos que no logran filtrar externalidades positivas a la mayoría de la población. El auge del crimen organizado es consecuencia de una serie de factores entre los que necesariamente debe destacarse el deterioro de la institución económica.

La explicación a la delincuencia como resultado de la pobreza, la desigualdad social y otras privaciones, conllevaría una perspectiva en que acabar con la delincuencia es atacar y terminar con sus "causas raíz" a partir de programas o estrategias de desarrollo económico que terminen con la pobreza, reduzcan la desigualdad y mejoren las condiciones sociales. Para el caso de esta investigación esto es un problema práctico de política pública. En primer término Michoacán carece de los recursos necesarios para terminar con estos factores estructurales del crimen. La pobreza y la desigualdad son tareas de mediano plazo dentro de una agenda de desarrollo del estado. A corto plazo no se podrán resolver las causales económicas del crimen. La resolución a los problemas de pobreza y desigualdad deben ser parte de una agenda de desarrollo de Michoacán.

Asimismo, debe señalarse que los problemas de pobreza y desigualdad descritos en el presente diagnósticos, se encontraban presentes desde tiempo atrás. ¿Por qué hasta ahora estos problemas irrumpen en la crisis de seguridad observada en los últimos años? La pobreza y la desigualdad son ancestrales en el estado. La explicación se da por la emergencia de grupos del crimen organizado que catalizaron la crisis económica con los resultados de violencia observados. Por lo tanto, un primer paso debe ser eliminar el factor detonante de

la actividad criminal y atacar los problemas estructurales de la economía con una perspectiva de mediano plazo. Arreglar la institución económica es importante, sin embargo, no existe evidencia de que la pobreza y el desempleo sean la única explicación a la situación de violencia que se vive actualmente. Al respecto, se preguntó en las entrevistas a profundidad acerca del peso que tiene la economía en la situación de violencia que se vive.

Las respuestas se dieron en términos de atribuir un peso importante a la miseria y los bajos salarios como causales del crimen, sin embargo, también se señaló, que no todos los involucrados se encontraban en posición de pobreza sino que era el dinero lo que motivaba sus acciones. Poca gente manifestó que los delincuentes se encontraran en disyuntivas de delinquir para cumplir sus necesidades más básicas. Por lo tanto, puede concluirse que el factor económico si bien influyó en la situación de crimen observado, no fue el factor fundamental.

El narco fue únicamente un catalizador de una situación de contradicción económica y social evidente. Lo que debe aprenderse es la necesidad de formular políticas de desarrollo económico realmente incluyentes a todos los sectores de la sociedad. El concepto de desarrollo regional debe asociarse con mejoras en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo para las personas. El desarrollo regional es algo más que la expansión agrícola o industrial, la producción y el crecimiento de la renta real per cápita. Tiene que ver con una mejoría de las condiciones reales de la población. La alta inseguridad existente es la punta del iceberg de una serie de contradicciones en la institución económica que se han traducidos en niveles bajos de ingreso, industrias relativamente exitosas y empobrecimiento de la población.

La economía regional en Michoacán ha evolucionado de manera poco alentadora, se pudo apreciar que la mayoría de las regiones atraviesan por una reducción en la participación económica y poblacional. Lo anterior seguramente tiene alguna relación con los aspectos criminales, desde la extorsión, hasta la incertidumbre sobre la seguridad privada de los negocios. Si bien, se ha mostrado una aproximación al tema, queda aún una línea de investigación pendiente para demostrar los efectos en la economía atribuibles al crimen, sin embargo, la evidencia apunta que hay una estrecha relación entre la reducción de la participación económica en algunas regiones, con la reducción de la participación poblacional y el incrementos del crimen.

Referencias

- Acosta Becerra, Juan Pablo. (2014). En Aguililla, mineros pagan extorsión... contra la extorsión. Diario Milenio. 26 de febrero de 2014. http://www.milenio.com/policia/Aguililla-mineros-pagan-extorsion-templarios-autodefensas_0_252574781.html.
- Aguirre Jerjes, (2013). *Alternativas de uso productivo de remesas*. Ed. ININEE-UMSNH.
- Agular Carmin, (2015). *La captura criminal del Estado*. Revista Nexos.
- Almanza, A. S. (2016). Sistema de ciudades y redes urbanas en los modelos económicos de México. *Problemas del desarrollo*, 47(184), 7-34.
- AP, (2015). “México reanuda exportación de hierro que suspendió por incursión del narco”. Portal de información: *24 Horas. El diario sin límites*. 10 de febrero de 2015.
- Becker, Gary S. (1968). “Crime and Punishment: An Economic Approach.” *Journal of Political Economy* 76: 169–217.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In *The Economic Dimensions of Crime* (pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
- Becker, Gary S. (1974). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Essays in the Economics of Crime and Punishment*. Gary S. Becker and William M. Landes, eds. University of Chicago y National Bureau of Economic Research.
- Bourguignon, F. (2000), Crime, Violence, and Inequitable Development, The World Bank, Washington D.C. World Bank Annual Conference on Development Economics.
- Braithwaite, John, Inequality, Crime, and Public Policy (1979)
- Brito, Steve, Remittances and the impact on crime in Mexico / Steve Brito, Ana --Corbacho, Rene Osorio, p. cm. — (IDB Working Paper Series ; 514)
- Cantor, D., Land, K.C., Unemployment and crime rates in the post-World War II United States: A theoretical and empirical analysis, *American Sociological Review*, vol. 50, no.3 (1985), pp.317-332.
- Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. 1979. Social change and crime rate trends: A routine activities approach. *American Sociological Review* 44:588–608.
- Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2017. Pobreza, 2014 Michoacán. Documento

- disponible en línea:
<http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/pobreza-2014.aspx>. Consulta marzo de 2017.
- Comisión Michoacana del Aguacate (COMA) 2012, Sistema Producto Aguacate: Plan Rector Estatal, Uruapan, Michoacán.
- Daniele, V. and Marani, U. (2011). Organized crime, the quality of local institutions and FDI in Italy: A panel data analysis. *European Journal of Political Economy* 27,132–142.
- Ehrlich, Isaac. "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation." *Journal of Political Economy* 81 (1973): 521–65
- Fajnzylber, P., Lederman, D. and Loayza, N. (2002a). Inequality and Violent Crime. *Journal of Law and Economics*, 45(1):1–40.
- Finklea (2011), Economic Downturns and Crime Kristin M. Specialist in Domestic Security December 19, 2011. Congressional research service. <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40726.pdf>
- Fleisher, Belton M. "The Effect of Income on Delinquency." *American Economic Review* 56 (1966): 118–37.
- Gómez Soler, Silvia. (2012). "Organized Crime, Foreign Investment and Economic Growth," *Revista Economía & Región*. Universidad Tecnológica de Bolívar.
- INAFED, (2016). *Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Michoacán de Ocampo*. Documento oficial, disponible en la web: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/regionalizacion.html>. Consulta, marzo d 2016.
- Jens Otto Ludwig; Greg Duncan and Paul Hirschfield, (2000), Urban Poverty and Juvenile Crime: Evidence from a Randomized Housing-Mobility Experiment, JCPR Working Papers, Northwestern University/University of Chicago Joint Center for Poverty Research
- Johnson, S., D. Kaufmann, y A. Shleifer (1997). The unofficial economy in transition. *Brookings Papers on Economic Activity*. (2), pp. 159–239.
- Kelly, Morgan. "Inequality and Crime." *Review of Economics and Statistics* 82 (2000): 530–39
- LaFree, G. D. (1998). *Loosing Legitimacy; street crime and the decline of social institutions in America*. Boulder: Westview.

- Lotspeich, Richard. 1995. "Crime in the Transition Economies." *Europe-Asia Studies* 47:555-89.
- Morales, Roberto (2013). "Ve EU récord en exportación de aguacate". Periódico *El Economista*, Diciembre 23 de 2014.
- Morrison, D. (1971). Some notes toward theory on relative deprivation, social movements, and social change. *The American Behavioral Scientist* (pre-1986), 14(5): 675.
- Oreopoulos, Phillip. (2003). The long-run consequences of living in a poor neighborhood. *The quarterly journal of economics*. 1533-1575.
- Navarro Chávez, José César Lenin, Plinio Hernández Barriga y Janett Chávez Carvajal. (2001). Medidas de Concentración del Ingreso y Desarrollo Humano: el Bienestar Social en Michoacán, 1990-2000. *Revista Ciencia Nicolaita*. 28: 19-43. Ed. UMSNH.
- Navarro Chávez, José César Lenin. (2008). *Índice de Desarrollo Humano Michoacán*. (Coordinador) Ed. PNUD. México, D. F.
- Navarro Chávez, José César Lenin, Plinio Hernández Barriga y Janett Chávez Carvajal. (2010). Distribución del Ingreso y Pobreza en el estado de Michoacán, 1980-2005. *Revista Mundo Siglo XXI*. 16(5): 55-66.
- Pinotti, Paolo. (2014). *The Economic Costs of Organized Crime: Evidence from Southern Italy*. Universita Boccon
- Redacción (2011). "Para pagar 'cuota' al narco, suben kilo de tortilla en Michoacán". *Revista proceso* 5 de diciembre de 2011. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=290237>.
- Red Política, 2014. "Extorsión a mineros, millonario negocio de los Templarios". El Universal, redacción. 6 de marzo de 2014. Disponible en: <http://www.redpolitica.mx/estados/extorsion-mineros-el-millonario-negocio-de-los-templarios>.
- Ríos, Viridiana y Kevin Sabet. Evaluating the economic impact of drug traffic in Mexico. Manuscrito disponible en <http://www.gov.harvard.edu/people/viridiana-rioscontreras>. Versión 2008.
- Ríos, Viridiana. "Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement." *Trends in organized crime* 16.2 (2013): 138-155.
- Stack, Steven, Income Inequality and Property Crime: A Cross-National Analysis of Relative Deprivation Theory, *22 Criminology* 229 (1984).

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2013) Global Study on Homicide. Disponible en <http://www.unodc.org> (accessed 24/07/2015).
- Vanderschueren, Franz. (2000). Prevención de la Criminalidad, documento de referencia. *Programa Ciudades más Seguras*. Hábitat. Comp. Organización de Naciones Unidas. Nairobi.